

DEMOCRACIA IMPOPULAR

David Ibarra
1 de marzo de 2007
El Universal

Como señala Luis Salazar (Configuraciones No. 17), la pobre educación política del mexicano, alentada por intensas descargas ideológicas de la derecha vernácula y foránea, se le ha encaminado a identificar lo estatal, con lo ineficaz, lo corrupto, lo autoritario. Sobre la base de esas verdades falsas o exageradas, se impulsó el tránsito nacional del autoritarismo a la democracia. Quedó en el olvido que mercado y Estado en vez de instituciones antagónicas son ambas indispensables en ordenar armoniosamente a la sociedad. El primero como mecanismo de coordinación de la vida económica y el logro de la eficiencia productiva; el segundo, como el instrumento para consensuar arreglos distributivos garantes de la equidad y la paz políticas.

El pecado original de nuestra modernización democrática ha residido en validar el predominio de lo económico, sobre lo social y lo político. El resultado ha sido el de ceder el poder a élites interesadas en hacer avanzar sus intereses y los derechos individuales y en hacer retroceder los derechos positivos, protectores del grueso de la población. Tenemos un cuarto de siglo empeñados en fortalecer las libertades de comercio, la inversión y los derechos de propiedad, pero el derecho a la salud, al trabajo, al salario remunerador se conservan como reliquias revolucionarias de la Constitución de 1917, sin desarrollarse en las leyes secundarias que les darían vida efectiva.

El Estado achica sus funciones al extremo de resultar incapaz de recaudar impuestos donde hay ingresos y riqueza, de atender demandas sociales

apremiantes o de poner coto a la descomposición social manifiesta en las migraciones, la explosión del empleo informal y la difusión de la delincuencia. En esas condiciones, la política y los políticos apenas pueden asumir la tarea de atenuar, sin resolver, el cúmulo de necesidades ciudadanas insatisfechas o de disimular las disparidades en el reparto de ingresos y poder.

El impulso democrático ciertamente hizo a un lado el autoritarismo de antaño, pero no alcanzó a controlar a los poderes económicos que ocupan ahora el sitio indisputado del poder, ante el vacío creado por la retirada del Estado. Nuestra democracia es notoriamente débil, no da acceso o aleja del control de las decisiones políticas fundamentales a la mayoría de la población o, por lo menos, a grupos tan numerosos que harían caricatura de cualquier régimen político moderno.

Según cifras oficiales, alrededor del 30% de la fuerza de trabajo y de sus familias engrosan la informalidad, o sea, quedan segregados del sector moderno de la economía. Los pobres integran alrededor del 40% de las familias y exceden del 50% en las zonas rurales. Dos tercios de los trabajadores, viven en el desamparo, fuera del Seguro Social y de otras instituciones con coberturas semejantes. El hambre, la falta de oportunidades o esperanzas de progreso han llevado a los diez u once millones de mexicanos ilegales a refugiarse a los Estados Unidos al carecer de voz política en México. Antes, los transterrados huían de la arbitrariedad del despotismo político, hoy lo hacen masivamente ante la autocracia de los poderes fácticos y la pasividad de las políticas públicas.

Las promesas de la revolución neoliberal en torno al bienestar general, crecimiento, empleo e inserción sana en el mundo globalizado, se han venido desvaneciendo a lo largo de un cuarto de siglo al igual que la credibilidad del

llamado Consenso de Washington. Sin embargo, seguimos aferrados a un credo que ya ha perdido lustre tanto en la confección de las políticas públicas, como en las ideologías o en la misma academia, en casi todo el mundo.

En México, se sigue eludiendo ejercitar la mano regulatoria del Estado pero se alienta a los mercados a acotar las funciones legitimadoras de la política. El modelo del banco central autónomo --independiente del escrutinio democrático y del voto-- se quiere extender a otras jurisdicciones estatales, a fin de avanzar en la despolitización de las decisiones públicas fundamentales. Al liberalizar los mercados, en contra de la práctica de los países exitosos, el Estado mexicano renunció al uso de los principales instrumentos del fomento productivo. Más y más, la política queda confinada al debate de medidas cortoplacistas dominadas por los ciclos electorales, mientras las discusiones medulares, el largo plazo, se dejan en las manos asépticas de tecnócratas y expertos, como si éstos no estuviesen influidos por sus preferencias ideológicas.

Más aún, los gobiernos enfrentados a decisiones controvertidas --reforma fiscal, laboral, energética-- ceden el terreno de las propuestas a los principales actores civiles o mercantiles involucrados, a fin de hacer surgir planteamientos cuyo éxito o fracaso no les represente costo político alguno. Haciendo violencia a la realidad, a la sociedad política, como al mercado, se le postula con suficiente desarrollo y madurez institucional para reemplazar con ventaja toda iniciativa estatal. Pero a la vez se quiere despojar a la democracia mexicana de sus componentes participativos. De ahí el énfasis en el respeto irrestricto de la ley, olvidando que muchas de las normas de factura reciente se impusieron autoritariamente de arriba abajo en las abundantísimas reformas constitucionales y legales del neoliberalismo de los últimos veinte años. Por eso, en la pasada campaña electoral se enfrentaron el dinero y la defensa doctrinaria del estado

constitucional de derecho a la fuerza de las copiosas manifestaciones en calles y avenidas, abrazadas en la lucha por una democracia incluyente, abierta a procesar las demandas ciudadanas.

Por tanto, en la reforma del Estado es imperativo combinar el componente constitucional de nuestro régimen democrático (pesos y contrapesos institucionales, imperio de la ley, gobierno para el pueblo) con el componente de la soberanía popular (participación ciudadana, apertura general al escrutinio democrático, creación y depuración de órganos de mediación política, gobierno del pueblo).